La estabilidad en transición

La revolución institucionalizada ha imprimido al sistema político mexicano una característica peculiar: el orden, la estabilidad y la relativa convivencia armónica que acompañan a cada gobierno se ve alterada sexenalmente con el cambio de éste. Históricamente, esta alteración se ha manifestado de múltiples y variadas formas, ya sea en las repercusiones que en la sociedad tienen los reajustes y alianzas entre los grupos en el poder, ya sea en la retracción de las inversiones hasta conocerse el rumbo que tomará el nuevo gobierno, ya sea en la efervescencia de la crítica, también rítmicamente sexenal, de lo realizado por el gobierno saliente.

La actual transición, inserta en esta línea, comporta sin embargo ciertos rasgos peculiares que le confieren su originalidad y que se asocian a la multiplicidad de lineamientos contradictorios que se han anunciado o realizado durante el régimen.

El diálogo, la negociación y la situación conflictiva que han caracterizado las relaciones entre el gobierno y la iniciativa privada han asumido un notorio tono de querella verbal, en lo que aparece como una pugna que es posible seguir de cerca a través de la lectura periodística. Sin embargo, recordemos que ambos han negociado permanentemente sus respectivos papeles y funciones en el proceso económico. Papeles que por no ser definibles de una vez y para siempre, sino sometibles a cambios y reajustes, se ponen nuevamente a discusión. La actual coyuntura, sin duda, altera la configuración de la correlación de fuerzas entre ambos, y entre éstas y los principales sectores y clases de la sociedad. En efecto, la estabilidad del mando político se conjuga y entrelaza con la alteración del tradicional indicador del buen comportamiento del sistema, la estabilidad económica y la inamovilidad de la paridad monetaria: se han sucedido dos devaluaciones.

Parece haber llegado el momento de las inculpaciones mutuas entre los socios mayores. Entre dos partes que han crecido y se han consolidado en dependencia mutua, y que sin embargo descubren una vez más la alta dosis de conflicto que encierra esta relación simbiótica. Al argumento de falta de responsabilidad social y ética religiosa con que el gobierno calificó el comportamiento de ciertos grupos de la iniciativa privada, le siguió la crítica a éste en términos de derroche e incompetencia en el manejo de las finanzas públicas.

Las ofensivas y contraofensivas no se escatimaron. Las críticas al gobierno por parte de diversos grupos del capital se refieren, una y otra vez, a la necesidad y conveniencia de que el Estado reasuma su tradicional función de crear el clima y las condiciones favorables para la inversión privada a través de las ya conocidas medidas económicas, como son los estímulos fiscales y el proteccionismo, y a través de lo que, esta vez sí, definen como eficaz: el

control efectivo de las clases populares. Esto supone que el Estado se retire de lo que califican como "competencia desleal", su ingerencia en los asuntos económicos, tal como se manifestó en el actual sexenio, y se aboque a sus ya clásicas y eficientes funciones. En otros términos, de las sucesivas críticas se desprende que el capital privado concibe y define la división del trabajo en términos muy precisos: el Estado contribuirá al crecimiento económico poniendo en juego su papel de garante de la estabilidad política del sistema.

En efecto, éste ha sido el papel que ha asumido a lo largo de los regímenes anteriores, y que se prolongó hasta la década de los sesentas, decenio del milagroso desarrollo estabilizador. El crecimiento mantuvo su prodigioso ritmo en un clima de estabilidad económica e inflación controlada, permitiendo que el capital operara con cuantiosas ganancias. El costo fue, sin embargo, el deterioro creciente de la situación de las clases populares y de los extensos sectores marginados. Dependientes de las organizaciones oficiales, unos, desorganizados e inermes, los otros, la estabilidad no se vio amenazada. Esto mientras América Latina se enfrentaba ya a la crisis y al agotamiento del patrón de desarrollo del capitalismo dependiente que por sus contradicciones internas no lograba conciliar desarrollo y estabilidad. Los ciclos comenzaron a alternarse, y tras la aplicación de políticas desarrollistas y de expansión se sucedían épocas de estabilización o estancamiento. El deterioro de los niveles de vida y la pauperización de las masas llevaron a éstas creciente combatividad y radicalización de sus demandas y a respuestas políticas que abrieron los conocidos ciclos de inestabilidad política de corte golpista y fascista. La capacidad de México de conjugar el binomio inconjugable bajo la forma de "desarrollo estabilizador" dependió esencialmente de un recurso político de fundamental importancia económica: el manejo y control efectivo de las demandas populares por parte de un sistema político capaz de conceder selectivamente las reformas emanadas de una revolución, de la cual ha sido su portavoz e intérprete discrecional.

Sin embargo, la década de los setentas principia con nuevos problemas y desafíos. El índice milagroso de crecimiento del Producto Nacional Bruto, así como del producto industrial decrecen abruptamente; la inflación comienza a hacerse presente junto a un aumento en la desocupación y al deterioro de las exportaciones. El panorama económico nacional comienza a denotar los síntomas de la crisis y la recesión que ya se habían expandido sobre el plano internacional, afectando intensa aunque diferencialmente a las economías centrales y a las periféricas. Recuérdese que la ascendiente *A* de la apertura democrática proclamada por el entonces nuevo régimen estuvo acompañada de una *A* no menos popularizada, la *A* de la atonía. Para evitar, o tal vez sólo para posponer los efectos paralizadores de esta nueva situación que se vislumbraban con toda precisión y mantener así el clima de excepción mexicano, el gobierno optó por una intervención mayor en la vida económica a costa de un desmedido e inusitado crecimiento de la deuda pública. De 1961 a 1970 ésta creció de 981 a 3 200 millones de dólares, alcanzando en 1974 los 7 981

millones y al finalizar el corriente año se estima que ascenderá a 29 452 millones de dólares. Paralela y consecuentemente, el gasto público amplió el déficit fiscal de 6 166 millones de pesos en 1971 a 58 078 millones en 1975.

Esta opción no alteró, sin embargo, un rasgo sobresaliente del sistema económico nacional, propio de los países dependientes. El crecimiento y su dinámica expansiva ha supuesto y reforzado la concentración del ingreso y la marginación. De ahí que, aún junto al desnivel de la balanza, a la grandiosa cifra de la deuda y al déficit fiscal, las empresas de capital privado han mantenido espectaculares ganancias. Según datos del Banco de México, en los últimos años la demanda y el consumo de los sectores privilegiados aumentó considerablemente, sufriendo un notable deterioro el de los sectores de bajos ingresos. La participación estatal en la economía centró una vez más la atención en la racionalidad de la acumulación capitalista, independientemente de las deformaciones y contradicciones de la distribución de la riqueza generada.

Esto se ha manifestado en la represión de aquellas manifestaciones populares independientes que han rebasado su control efectivo por parte del sistema, a través de concesiones selectivas, o por medio de un creciente control y manipulación.

De ahí que las recientes devaluaciones cuestionan la capacidad del sistema de mantener los mecanismos existentes de aceptación de la clase obrera de una ulterior pauperización o, en otros términos, el grado de independencia y combatividad que ésta pueda alcanzar.

Los supuestos y medidas que han acompañado a este viraje en la política monetaria parecen indicar que los sectores asalariados y marginados serán los que soporten, fundamentalmente, los efectos del cambio. El aumento de los precios, desproporcional al aumento de los salarios, llevará forzosamente al deterioro de los niveles actuales, bajos de por sí.

Paralelamente, el mercado externo y la producción para la exportación aparecen como los estímulos fundamentales a la producción. Se habla ya de la "natural" contracción que sufrirá el mercado interno, lo que significa, una vez más, el descuido y sacrificio del consumo de las mayorías nacionales.

Singularmente, terminantes recomendaciones que la iniciativa privada plantea al gobierno coinciden con las directrices de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial. El gasto público debe contraerse, limitándose a inversiones que generen mayor productividad y riqueza, etcétera, que deben aplazarse las demandas salariales para controlar la inflación. Se desprende que los gastos en seguridad social, salud y educación, que podrían consolidarse como paliativos a la desigualdad estructural, son considerados superfluos. Las reformas que podrían introducir mayor racionalidad al sistema en su conjunto son definidas como amenaza.

Frente a esta situación baste recordar las declaraciones de Fidel Velázquez, que la definen como de simple reajuste y no de crisis, por lo que el sindicalismo oficial no demandará aumentos salariales para contribuir así a recobrar la

confianza en el peso. Ejemplar muestra de disciplina y eficiencia de una pieza clave del juego político institucional que ha mantenido su poder y se presenta lista a inaugurar la alianza para la producción. He aquí la peculiaridad de un sistema cuya situación actual es definida como crítica por sus beneficiarios a largo plazo, y como pasajera por sus afectados a corto y largo plazo.

Adquiere pues plena relevancia y significado histórico el comportamiento que habrán de asumir los sectores de la clase obrera que, a costa de una lucha bloqueada y reprimida, han alcanzado una organización independiente y que pueden articular sus demandas en términos de sus necesidades e intereses. En la medida que éstos se consoliden, el costo de la estabilidad política será cada vez más alto. En este renglón es en el que las reclamaciones y sugerencias de sectores de la iniciativa privada le exigen al Estado aún mayor eficacia de la alcanzada.

11 de noviembre de 1976

Judit Bokser